

Cómo erradicar la pobreza de la humanidad

En la actualidad, ya nadie se atreve a discutir públicamente que la pobreza es el mal principal que azota a la humanidad y a la mayoría de los países, incluidos los industrializados, donde cada vez es más frecuente encontrar mayor desempleo y la expansión de los llamados "bolsones de pobreza". La cumbre mundial de Copenhague, patrocinada por Naciones Unidas, ha introducido en la agenda mundial la pobreza, reconociendo al mismo tiempo que el crecimiento económico no implica necesariamente mejoras en la calidad de vida de la mayoría de la población.

Al contrario, la cumbre reconoce que la prosperidad de los países industrializados y de grupos privilegiados en los no industrializados implica el aumento de la pobreza extrema de todos los demás. Asimismo, reconoce la existencia de un consumo desenfrenado que, a su vez, es causa del deterioro continuo del medio ambiente mundial. En cifras, esto quiere decir que más de mil millones de personas viven en pobreza extrema, privadas gravemente de alimentación, agua potable, vivienda, saneamiento, salud, educación e información; más de 120 millones no tienen empleo y muchas más están subempleadas y la mayoría padece hambre. Sin embargo, no todos son igualmente vulnerables sino que las mujeres, los niños, los mayores, los refugiados, los desplazados, los discapacitados y los indígenas son los más afectados por la pobreza.

Estos datos cuestionan que los programas actuales de ajuste estructural sean el medio más adecuado para generar el bienestar de la humanidad. La realidad muestra cómo, efectivamente, tales programas han permitido cierto bienestar para unos pocos privilegiados, pero al mismo tiempo, han generado pobreza, marginación y violencia para la mayoría, en particular para las mujeres y los niños. En otras palabras, la riqueza de unas cuantas naciones industrializadas y de reducidos grupos nacionales ha sumido en la pobreza y ha desintegrado socialmente a la

Uno de los aspectos más valiosos del planteamiento de la cumbre sobre la pobreza y su erradicación es su visión estructural.

humanidad, deteriorando su medio ambiente.

Uno de los aspectos más valiosos del planteamiento de la cumbre sobre la pobreza y su erradicación es su visión estructural. La pobreza no es un mal entre los muchos que tiene que sufrir y enfrentar la humanidad, sino que es el mal principal, en cuanto principio de todos los demás males. En efecto, el principio de los males que azotan a la humanidad en la actualidad es la desigualdad abismal que, por otro lado, es funcional al sistema y al modo de vida de la clase dominante. Por lo tanto, la eliminación de los males que la humanidad sufre pasa por la erradicación de la pobreza.

Ahora bien, no es suficiente con identificar el mal principal, sino que hay que buscar su raíz, de lo contrario, con facilidad se cae en la compensación y en el asistencialismo social, las cuales pueden paliar los efectos de la pobreza, pero nunca erradicarla. Para ello hay que ir al origen de la pobreza misma, cosa que la cumbre no hace con suficiente claridad, por lo menos no lo destaca como debiera ni le otorga la importancia que tiene. El origen o, en términos cristianos, el pecado original está en la exorbitante acumulación de riqueza en unos cuantos países y personas privilegiados, mientras todos los demás se empobrecen cada vez más, y en el sistema que permite semejante desorden e injusticia social.

Cabe destacar que la cumbre entiende la pobreza no sólo como despojo de los bienes materiales, sino también como negación de espacios sociales, políticos y culturales. Al describir las manifestaciones de la pobreza no sólo se habla de falta de ingresos y de recursos productivos suficientes para garantizar los medios de vida sostenibles, de hambre y malnutrición, de mala salud, de falta de acceso o acceso limitado a la educación y a los servicios básicos, de aumento de la morbilidad y de la mortalidad a causa de las enfermedades, de carencia de vivienda o de vivienda adecuada, sino también de discriminación y exclusión social, de falta de participación en la adopción de decisiones en la vida nacional, de obstáculo para la comunicación y de una vulnerabilidad mayor en las catástrofes naturales y en los conflictos.

La pobreza, por lo tanto, no sólo se manifiesta en la falta o escasez de ingresos o recursos materiales, sino también en la imposibilidad para acceder a servicios sociales básicos y para poder ejercer derechos y libertades fundamentales como la participación social y la comunica-

ción. Por lo tanto, su erradicación no comprende únicamente la redistribución de la riqueza, sino también abrir espacios para la participación y la integración social y cultural. Dicho con otras palabras, de la misma manera que la acumulación de la riqueza niega la democracia; su redistribución es condición de posibilidad para democratizar las sociedades y las relaciones internacionales.



Otro elemento importante introducido en el análisis de la pobreza es la dimensión ética. La cumbre no habla únicamente en términos económicos y sociales, sino que también considera la erradicación de la pobreza como un imperativo ético. Contrario a lo que piensan los economistas tradicionales, las leyes de la oferta y la demanda no son suficientes para regir equilibradamente la vida de las sociedades. Según la cumbre, la ética es fundamental para impedir la explotación de las personas, familias y grupos, y para impedir la corrupción, así como para promover la responsabilidad social, entendida como búsqueda y preservación del bienestar de todos, y el fortalecimiento de las instituciones sociales y políticas.

En suma, hay que reconocer a la cumbre haber identificado el mal principal de la humanidad, la pobreza. Sin duda, a ello contribuyó que su extensión y gravedad sean inocultables, pero probablemente la amenaza que los millones de pobres representan para la tranquilidad y la seguridad nacional e internacional fue más determinante.

Ahora bien, el consenso sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la urgencia con la cual hay que hacerlo no llega hasta las propuestas. Existen dos contradicciones fundamentales que pueden neutralizar las consecuencias prácticas de la cumbre. La primera de ellas surge entre quienes buscan ir a las raíces del mal y quienes, aunque reconocen su magnitud y gravedad, se quedan en las ramas. La segunda contradicción se da al proponer de manera simple el desarrollo social como complemento del económico, asumiendo que los países industrializados son el modelo perfecto de ambos desarrollos para todos los demás, cuando los

datos y la experiencia muestran que dicho modelo es materialmente inalcanzable.

A continuación reflexionaremos sobre estas dos contradicciones, intentando avanzar sobre los planteamientos de la cumbre. Después de Copenhague, la discusión ya no gira sobre la existencia de la pobreza y sus efectos devastadores sobre la humanidad y el medio ambiente, sino en proponer y poner en práctica soluciones efectivas para erradicarlos.

El paso dado en la cumbre Copenhague es, sin duda, de gran trascendencia para el futuro de la especie humana, pero es insuficiente porque las contradicciones señaladas revelan falta de voluntad política y de claridad teórica. Mientras estos obstáculos no sean superados, la humanidad no podrá vivir en condiciones de menor desigualdad e injusticia. Mientras no se llegue a propuestas realmente efectivas, es imposible hablar de un consenso para erradicar la pobreza e implantar la igualdad, la armonía, la solidaridad y, finalmente, la justicia social, tal como propone la cumbre.

1. El poder inmenso del capital

La declaración de la cumbre de Copenhague propone diez compromisos para erradicar la pobreza, cuya responsabilidad principal recae sobre los jefes de Estado. En sí mismos, nueve de los diez son bastante consecuentes con el planteamiento general sobre la pobreza. Al suscribirlos, los estados se comprometen —en el segundo compromiso de la declaración— a reducir considerablemente la pobreza y las desigualdades en breve tiempo, así como también a erradicar la pobreza absoluta en un plazo establecido por cada país. En consecuencia, tanto las políticas nacionales como la internacional deben asumir como objetivo estratégico ambas metas.

Dado que la pobreza va más allá de la escasez o negación de recursos materiales, los estados también se han comprometido —en el primer compromiso de la declaración— a legislar para promover la igualdad y la equidad entre los hombres y las mujeres, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, el imperio de la ley, el acceso a la justicia, la eliminación de todas las formas de discriminación, el “buen” gobierno —transparente y responsable— y la colaboración con las organizaciones libres y representativas de la sociedad civil.

El tercer compromiso adquirido obliga a declarar el pleno empleo una prioridad de la política económica y social. Por el cuarto, los estados se comprometen a promover la integración social, entendida como estabilidad, seguridad y justicia, basadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en la no discriminación, en la tolerancia, en el respeto a la diversidad, en la igualdad de oportunidades y en la solidari-

dad y la participación, en particular de los más desfavorecidos y vulnerables.

El quinto compromiso subraya el pleno respeto a la dignidad humana y, en este contexto, a la igualdad y equidad entre los hombres y las mujeres. El sexto compromete a los estados a acelerar el desarrollo de Africa y de los países no industrializados. Los tres siguientes son una consecuencia del anterior: aumentar sustancialmente (los países industrializados) o utilizar con mayor eficacia (los no industrializados) los recursos asignados para erradicar la pobreza, universalizar la educación y mejorar y fortalecer la cooperación internacional, regional y subregional con el mismo fin.

Aunque la cumbre deja a discreción de los estados los plazos en los cuales deberán conseguir algunas de estas metas, al mismo tiempo intenta comprometerlos a esforzarse para satisfacer algunas de las necesidades básicas para el año 2000: reducir la tasa de mortalidad de los lactantes y menores de cinco años a un tercio del nivel de 1990, reducir la mortalidad materna a la mitad del nivel de 1990, reducir la malnutrición grave y moderada de los menores de cinco años a la mitad de 1990, conseguir un nivel de salud que permita una vida productiva y atención primaria para todos, erradicar, eliminar o controlar las enfermedades principales, elevar la esperanza de vida a sesenta años o más, permitir el acceso universal a la educación básica y que la mayoría pueda concluirla, suprimir la diferencia en las tasas de escolarización entre niños y niñas en primaria y secundaria, reducir la tasa de analfabetos a la mitad de 1990, acceso sostenible a agua potable, servicios sanitarios adecuados para todos y mejorar la disponibilidad de viviendas económicas adecuadas.

Sin embargo, la relativa consistencia de estos nueve compromisos es cuestionada por otro —el séptimo—, según el cual los estados velarán para que los programas de ajuste estructural incluyan la erradicación de la pobreza, la generación de empleo pleno y la integración social. La misma petición se hace a las organizaciones financieras internacionales multilaterales que imponen estos programas, específicamente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Ahora bien, este compromiso contradice los demás e incluso el propósito general de la cumbre misma, pues el ajuste estructural tal como ha sido impuesto y aplicado hasta ahora ha mostrado ser incompatible con la erradicación de la pobreza. Ahí donde se ha aplicado, la pobreza ha aumentado.

La contadición principal de la cumbre radica en que, por un lado, dice querer erradicar la pobreza, pero, por el otro, no puede desembarazarse del esquema neoliberal, proponiendo otra alternativa viable. Su petición sobre el ajuste estructural es a todas luces insuficiente. Habría

que especificar que a los países no industrializados les han impuesto unos programas de ajuste que se caracterizan por políticas recesivas — insuficiente asignación de recursos para los productores medianos y pequeños—, por la apertura indiscriminada del mercado —que, aparte de ser prematura, no es recíproca—, por una política fiscal regresiva y por las obligaciones onerosas de la deuda externa. En conclusión, el ajuste está diseñado para enriquecer más a los ricos y para hacer posible el pago de una deuda impagable. El dogmatismo neoliberal se ha traducido en ajustes muy concretamente mortales. Esto no significa, por otro lado, que no se deban corregir la burocratización y la corrupción estatal así como los excesos del gasto público ineficiente, es decir, aquello que hizo que el keynesianismo empezara a no dar de sí.

En realidad, esta contradicción permea los compromisos y las propuestas de la cumbre, tanto que en el primer compromiso, precisamente cuando se habla de igualdad y equidad, de no discriminación y de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, también se reclama la promoción del mercado dinámico, abierto y libre como uno de los instrumentos adecuados para conseguir los bienes anteriores, aunque admitiendo la necesidad de la intervención estatal para prevenir y contrarrestar su caída, mantener la estabilidad y las inversiones de largo plazo, y para velar por la competencia leal y ética. Indudablemente, el mercado es necesario así como la intervención estatal para corregir sus desviaciones y vicios, pero no reconocer explícitamente que ambos son responsables, en buena medida, del desorden mundial y de la injusticia social es un olvido peligroso. Para convertirlos en instrumentos eficaces en la lucha contra la pobreza, hay que reconocer primero cómo han contribuido a crearla y transformarlos en agentes de cambio.

La cumbre pretende dar la batalla contra la pobreza con los instrumentos neoliberales clásicos, desconociendo la experiencia que muestra que éstos necesitan ser transformados radicalmente. El Banco Mundial, por ejemplo, desde hace varios años ha estado promoviendo programas de compensación social y, más aún, en 1990, declaró la lucha contra la pobreza, pero todavía no ha obtenido ningún resultado relevante. Al contrario, lo único que tiene en su haber es más pobreza.

La forma cómo los programas de ajuste estructural se han aprobado e impuesto no favorece la participación ni la integración social que la cumbre propone como fundamentales para luchar contra la pobreza. Expresamente se ha excluido la participación de los sindicatos e incluso de las asambleas nacionales en estas decisiones, alegando que la concertación politizaría una decisión aparentemente muy técnica y pondría en peligro el rendimiento técnico óptimo de dichos programas. Sin embargo, el costo debe pagarlo la sociedad y en especial sus sectores

más vulnerables.

Los programas de ajuste estructural atentan directa y a veces también conscientemente contra esa participación e integración al debilitar a amplios sectores sociales. No hay que perder de vista que estos programas, además de imponer orden macroeconómico, debilitan y desarticulan la organización popular. Al volver precario el empleo y al empobrecer a las clases medias y a los trabajadores debilitan sus organizaciones, su poder de negociación y concertación y, en definitiva, su capacidad para influir en la política nacional e internacional. Simultáneamente y en correspondencia con la concentración de la riqueza, el modelo neoliberal ha aumentado el poder político de los grupos y de las organizaciones vinculados a los sectores económicos favorecidos por sus políticas, es decir, a los grandes propietarios del capital financiero y a las grandes empresas transnacionales.

Los ideólogos neoliberales insisten en que la liberalización económica refuerza la apertura democrática, pero la evidencia empírica muestra lo contrario y así lo confirma el diagnóstico de la situación mundial, en el cual se apoyan la declaración y los compromisos de la cumbre. El modelo impuesto impide al Estado adoptar políticas sociales, fiscales, de empleo, etc., orientadas a reducir la pobreza, a colocar los fundamentos económico sociales de la democracia real y a garantizar la integración social que, a largo plazo, debieran sustentar el régimen democrático.

La transición salvadoreña es un buen ejemplo de esta imposibilidad estructural. Los acuerdos de paz abrieron un espacio para que las demandas populares, reprimidas durante décadas, emergieran. Sin embargo, las restricciones fiscales impuestas por el ajuste y por el pago de la deuda externa reducen de tal manera el margen del gobierno que, desde esta perspectiva, le han impedido atender debidamente dichas demandas. La reacción social ante los repetidos incumplimientos no se ha hecho esperar y se manifiesta en el desencanto ante los partidos políticos y la práctica política en general, en la deslegitimación de las instituciones públicas y del régimen democrático, en la violencia y el descontento y en la protesta social. Con todo esto se consigue lo contrario de lo que supuestamente se pretende en cuanto a democratización, pues la frustración de los sectores medios y de las clases populares es un terreno abonado para los movimientos o los dirigentes demagógicos populistas o autoritarios.

El ajuste estructural es igualmente incompatible con el pleno empleo, otra de las tres grandes metas de la cumbre, pues ahí donde se impone

Hay que reconocer a la cumbre haber identificado el mal principal de la humanidad, la pobreza.

vuelve precario el mercado de trabajo, desplaza contingentes importantes de trabajadores al sector informal, donde los ingresos y la productividad son bajos, y reduce severamente el salario real. Esto ha supuesto mayor demanda sobre los servicios sociales, pero al recortar el gasto público, también una exigencia del ajuste, la capacidad estatal para responder se limita grandemente. En realidad, la política social del ajuste estructural se plantea casi exclusivamente en términos de mercado con lo cual a menudo se impide el acceso a los servicios básicos a los más pobres.

Asimismo, es imposible afirmar simultáneamente la defensa del medio ambiente y el capitalismo neoliberal. La concepción de desarrollo impuesta en el mundo por este capitalismo se basa en el crecimiento económico a ultranza, sin considerar cómo éste reduce la base material de los recursos disponibles. En otras palabras, el desarrollo impuesto no es sostenible ecológicamente. Pero eso no es todo, puesto que los programas de ajuste han profundizado la no sostenibilidad del crecimiento de muchos países, intensificando la sobre explotación de los recursos naturales y acelerando con ello el deterioro del medio ambiente, el cual está asociado a la pobreza.

Es cierto que desde finales de la década pasada, las dos instituciones financieras internacionales responsables de este concepto de desarrollo insostenible, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, introdujeron en sus políticas el medio ambiente, aumentando los fondos para financiar proyectos verdes y exigiendo una evaluación del impacto ecológico de sus programas. Ahora bien, ninguno de estos cambios ha alterado el enfoque del ajuste estructural ni el del crecimiento económico y, por consiguiente, sus consecuencias devastadoras en el medio ambiente. En otras palabras, a pesar de su discurso verde, ninguna de estas dos instituciones internacionales ha enfrentado aún los verdaderos dilemas del desarrollo sostenible.

2. Las debilidades de la cumbre

La contradicción anterior no es únicamente teórica, sino que tiene consecuencias prácticas muy importantes para los objetivos de la cumbre, pues debilita sus propuestas con el riesgo grave de neutralizarlas. En efecto, Naciones Unidas no consiguió comprometer al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial en la lucha contra la pobreza y dicho compromiso es fundamental para avanzar en ella. Quizás esta falta de acuerdo explique el fuerte acento neoliberal que se advierte en el documento presentado en la cumbre por Naciones Unidas. Pero al intentar conseguir el respaldo de esas dos instituciones internacionales claves, haciéndoles concesiones importantes, pone en peligro las metas que

la cumbre misma propone.

La falta de acuerdo entre Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no es algo nuevo. Desde su fundación, las relaciones entre estas organizaciones se han caracterizado por la contradicción y la divergencia. Aunque la carta fundacional de Naciones Unidas de 1945 establece que la cooperación y el desarrollo económico forman parte de sus fines, en la práctica, ambas cuestiones han estado fuera de su alcance: el poder monetario y financiero está en manos del Fondo Monetario Internacional, mientras que el financiamiento del desarrollo ha quedado a cargo del Banco Mundial.

Ninguna de estas dos instituciones trabaja por el bienestar de la humanidad, sino que están abiertamente al servicio de los intereses de los países industrializados, perjudicando en forma directa a los no industrializados. El Fondo Monetario Internacional es un instrumento para imponer un orden internacional injusto, que al responder casi ex-



clusivamente a los intereses de los países industrializados, ha aumentado la desigualdad y la pobreza sin ningún reparo. El Banco Mundial, por otro lado, en lugar de presentar obras de desarrollo en beneficio de la humanidad, nos confronta con que la brecha entre el norte y el sur es mayor ahora que antes, con que la pobreza sigue siendo endémica y con que el medio ambiente mundial sufre un deterioro agudo.

Ambas instituciones financieras están organizadas para imponer la voluntad de los países industrializados a la comunidad internacional, aun en perjuicio de los intereses de los demás países, a los cuales ni siquiera les permiten organizarse en bloques regionales para proponer con fuerza sus demandas. Contrario a la asamblea general de Naciones Unidas, en la cual cada nación tiene un voto, en las asambleas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial no todos los votos tienen el mismo valor, sino que valen más los de aquellas naciones que aportan la cuota o el capital mayor. Por otro lado, los votos de la primera no son vinculantes, pero sí los de las segundas. De esta manera, la cooperación económica mundial, uno de los elementos cruciales de la lucha contra la pobreza, está al servicio de los intereses de los países industrializados, en especial de Estados Unidos.

Nada de esto sucede por descuido o casualidad. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, respaldados por Estados Unidos, desde un principio exigieron autonomía respecto de Naciones Unidas, alegando que debían ser independientes de instancias y motivaciones políticas, puesto que sus tareas eran exclusivamente técnicas. Ni siquiera la Comisión Económico Social, establecida como instancia de alto nivel para deliberar y coordinar las agencias y políticas económicas de los estados miembros de Naciones Unidas, influye en las decisiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

En consecuencia, el Fondo Monetario Internacional no se ha considerado como un instrumento multilateral para coordinar las políticas macroeconómicas tal como lo pretende la carta de Naciones Unidas ni el Banco Mundial puede considerarse como el promotor del desarrollo mundial. Más aún, las estrategias económicas de estas dos instituciones con frecuencia contradicen las elaboradas por Naciones Unidas desde la década de los sesenta. En la década pasada, la ortodoxia neoliberal y los programas de ajuste estructural no sólo neutralizaron las propuestas de desarrollo alternativo y de cooperación entre el norte y el sur, lanzadas por los países no industrializados, sino que también pusieron fin a los esfuerzos que durante años hicieron los organismos especializados de Naciones Unidas en desarrollo, educación, infancia y salud.

El Salvador es un buen ejemplo de esta descoordinación y contradicción entre las políticas de Naciones Unidas y las del Fondo Monetario

Internacional y del Banco Mundial. Mientras Naciones Unidas impulsaba las negociaciones para finalizar la guerra y la transición, las otras dos instituciones impusieron por su cuenta un programa de ajuste estructural riguroso, limitando severamente la capacidad financiera del gobierno para hacer frente a los gastos derivados de los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz. De esta manera, el gobierno salvadoreño ha tenido que enfrentar el dilema siguiente: sacrificar la estabilización económica a la implementación de los acuerdos de paz o aplicar el ajuste poniendo en peligro la transición. El dilema bien pudo evitarse y la transición pudo haber consolidado la democracia, si la política económica se hubiese diseñado de tal manera que reforzara el proceso de paz en lugar de debilitarlo. Pero para ello hubiese sido necesario que Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial trabajasen de acuerdo.

Con toda razón, la declaración y el plan de acción de la cumbre de Copenhague subrayan la necesidad de la cooperación internacional para erradicar la pobreza, pero ello es imposible sin el respaldo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y, más concretamente, de Estados Unidos, y sin transformar radicalmente o reemplazar ambas instituciones. Su poder económico y financiero es tal que sin ellas no se pueden implementar los planes de cooperación internacional los cuales, por otro lado, son muy importantes para tener éxito en la lucha contra la pobreza. Pero el respaldo no es suficiente, puesto que ninguna de ellas se ha caracterizado por propiciar dicha cooperación. Hasta ahora, su función principal ha consistido en traspasar la riqueza del sur al norte y en mantener el sistema capitalista operando en beneficio de los países industrializados. Por eso, su no interferencia sería un paso importante, pero para asegurar el éxito es necesario hacer algo más positivo que no interferir. De ahí que se imponga o la reforma radical o la sustitución de ambas instituciones por otras que sean más democráticas y dedicadas a combatir la pobreza. Esto implica, simultáneamente, un cambio en la política de Estados Unidos.

Por si esto no fuese poco, los estados nacionales han perdido el control sobre aspectos vitales de su política económica —la política fiscal, la oferta monetaria, la política cambiaria, los tipos de interés y la política salarial y de protección social—, de tal manera que, aunque quisieran, no podrían dedicar sus recursos y sus energías a erradicar la pobreza. La liberalización ha arrebatado la soberanía a los estados y se la ha entregado a los organismos financieros internacionales, a la banca transnacional y a los países acreedores. Al perder la libertad para determinar su propia política económica y social, los países del tercer mundo han perdido también el control sobre su destino como nación. Esta es la otra cara de la globalización que, pese a lo que afirman sus

La contradicción principal de la cumbre radica en que, por un lado, dice querer erradicar la pobreza, pero, por el otro, no puede desembarazarse del esquema neoliberal.

promotores, encadena más vigorosamente a los países en la dependencia y en la pobreza.

Extraña, entonces, que Naciones Unidas, en lugar de pedir la transformación radical o la desaparición y sustitución del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, les haya hecho concesiones importantes en la declaración y en su plan de acción, poniendo en grave peligro la eficacia de sus propias propuestas. La ambigüedad de Naciones Unidas llama más la atención en cuanto que ninguna de estas instituciones ha manifestado su disposición para revisar sus estrategias. En el seno mismo de la cumbre, el director del Fondo Monetario Internacional reafirmó su fe en el mercado neoliberal y en el libre comercio y atribuyó la pobreza al uso inadecuado de los recursos disponibles por parte de los países pobres.

Todo lo anterior se vio confirmado en la actitud de no compromiso que adoptaron los países industrializados al discutir algunas de las propuestas más importantes para erradicar la pobreza. Estos países pelearon hasta el último minuto para eliminar la obligatoriedad de algunos compromisos, dejándolos al final a discreción de los gobiernos. Algunos países pobres también opusieron resistencia, siendo la más notoria la de los países asiáticos que se negaron a condenar el trabajo de los menores de edad y a reconocer el derecho a la educación universal. Es claro, entonces, que la erradicación de la pobreza no depende únicamente de la voluntad política de los países industrializados, sino que los no industrializados también tienen que hacer reformas radicales.

Pese a que el servicio de la deuda externa es uno de los obstáculos más grandes para poder invertir en programas sociales, la petición de condonarla o de suspender su pago durante una década no fue atendida. En el compromiso final, los países acreedores sólo aceptaron tratar el asunto bilateralmente. Otra iniciativa interesante, la llamada 20-20, corrió igual suerte. Según esta propuesta, los países ricos destinarían el 20 por ciento de toda su ayuda externa al desarrollo, mientras que los receptores dedicarían al mismo fin el 20 por ciento de su presupuesto. Los países industrializados ni siquiera se comprometieron clara y firmemente a destinar cuanto antes el 0.7 por ciento de su producto nacional bruto para ayudar a los países no industrializados, tal como prometieron hacerlo hace ya mucho tiempo.

Otra de las propuestas más importantes por sus efectos positivos a



nivel mundial —la reducción de los gastos militares, del comercio de armas y de la inversión en la producción y adquisición de armamento— pasó casi desapercibida. Si entre 1987 y 1994, los presupuestos militares hubiesen disminuido en tan sólo el 3 por ciento, se hubiesen liberado unos 930 mil millones de dólares, cantidad que supera con creces la ayuda externa. Paradójicamente, los países no industrializados gastan en armamento el doble de lo que reciben en ayuda. La industria militar es una de las más florecientes, tanto en el norte como en el sur, pues la demanda de sus productos es constante. Aunque de ella se benefician tanto los países ricos como los pobres, Estados Unidos es el menos interesado en reducir esta actividad tan rentable, puesto que es uno de los que más produce y vende.

Al final, no obstante las cautelas para no comprometerse seriamente, los pocos compromisos adquiridos por los estados son débiles, puesto que no son obligatorios. Aunque los países del sur, obviamente, deben introducir reformas radicales, los problemas mayores se encuentran en el norte, porque ahí se encuentran los de solución más difícil y porque es donde los cambios deben ser más drásticos. En cualquier caso, las reformas en el sur serían más fáciles si primero se introdujeran en el norte.

La cumbre pudo haber hecho un aporte mucho más valioso si además de analizar la pobreza y sus efectos devastadores en la humanidad y en el medio ambiente, se hubiese también preguntado por qué predomina la

pobreza en lugar del bienestar general. Esto hubiera llevado al pecado original y a proponer medidas más reales y, por lo tanto, más eficaces. Quizás las propuestas hubiesen sido rechazadas por los estados por considerarlas demasiado radicales, pero habrían indicado el camino a seguir para erradicar con el pernicioso mal de la pobreza. La cumbre se quedó corta en su análisis y, en consecuencia, debilitó sus propuestas.

3. Un concepto de desarrollo inadecuado

La cumbre de Copenhague pretendía reconocer el desarrollo como un derecho universal e inalienable y como parte integral de los derechos humanos. Así, sus documentos se refieren indistintamente al desarrollo económico y al social de tal forma que pareciera que de la misma manera que se busca el primero se debiera buscar también el segundo. Ciertamente, lo económico y lo social son dimensiones de una misma realidad, pero los políticos y los economistas, al diseñar estrategias nacionales y regionales, han procedido como si no lo fueran. Uno de los esfuerzos más notables de la cumbre consiste en tratar de recuperar la relación intrínseca de ambas dimensiones de la realidad. Ahora bien, esta recuperación no se lleva a cabo poniendo juntos ambos desarrollos, porque el concepto de desarrollo utilizado es insuficiente e incluso contradictorio.

El concepto es inadecuado porque se piensa que los países industrializados y de modo especial Estados Unidos son los que han alcanzado el nivel de desarrollo ideal. Por lo tanto, todos los demás deben aspirar a alcanzar ese nivel. Por una serie de razones que no vienen al caso, se da como un hecho que el nivel de producción y consumo de Estados Unidos es la meta que todos los demás países debieran alcanzar y, por lo tanto, hacia donde debieran orientar sus esfuerzos. No en vano los países se clasifican según su proximidad o lejanía a dicha meta. Declarar que el objetivo universal es el nivel de producción y consumo de Estados Unidos es una petición de principio, además de ser irreal e inmoral. Es irreal porque está probado de sobra que en el planeta no existen los recursos necesarios para que todos los países algún día alcanzasen dicha meta; aparte de que el responsable principal de la pobreza y del desastre ecológico global es ese nivel desenfrenado de producción y consumo. Es inmoral porque aquello que no es universalizable no es moral. Por consiguiente, es contradictorio proponer como meta algo materialmente imposible y moralmente condenable.

Cuando se habla de desarrollo sin más, y la cumbre cae en este error, se le otorga un carácter de necesidad que no tiene. Pareciera incluso que el bienestar de la población está intrínsecamente relacionado con el desarrollo, entendido en términos exclusivamente capitalistas,

de tal manera que no se puede renunciar a éste sin renunciar a aquél. Asimismo, es cuestionable que al desarrollo se llegue únicamente por el crecimiento económico. En este punto, Naciones Unidas mantiene, en el mejor de los casos, una posición ambigua, sin duda, por las mismas razones por las que no puede desembarazarse de las tesis neoliberales. Formalmente rechaza la identificación de crecimiento y desarrollo, pero, al reconocer que es necesario cierto grado de crecimiento, acaba predominando la tesis clásica.

A estas alturas es inaceptable seguir manteniendo que el modelo de desarrollo de Estados Unidos es repetible cuando la brecha entre los países ricos y pobres se ha ampliado, cuando el desempleo y el subempleo ya no son característicos de los países no industrializados, sino también de los industrializados, cuando la crisis ecológica es general y cuando la desintegración social y personal se profundiza en ambos mundos. Estas contradicciones debieran poner fin para siempre al mito del desarrollo estadounidense.

El desarrollo económico no solamente ha demostrado su incapacidad para crear la abundancia prometida, sino que ni siquiera ha podido satisfacer las necesidades mínimas de la mayor parte de la humanidad. Más aún, el desarrollo es responsable de la desmedida acumulación de riqueza y poder en ciertas clases y países privilegiados del norte y en sus aliados del sur. Precisamente, para encubrir esta realidad injusta y opresora, ellos mismos se encargan de mantener vivo el mito del desarrollo.

Si el desarrollo económico vigente es responsable de la pobreza y de la desintegración que se quieren superar, ello no se conseguirá agregando simplemente al primero el llamado desarrollo social. Si no se avanza hacia un replanteamiento global y total del orden internacional, lo único que se estará haciendo es remozar el mito con el desarrollo social. En realidad, la estructura capitalista y su dinámica destructiva seguirán devastando y depredando, mientras se espera ingenuamente alcanzar un nivel de desarrollo que, por la propia naturaleza del orden internacional, es inalcanzable.

No debe olvidarse que el principio del problema se encuentra en la acumulación escandalosa de la riqueza por una parte muy reducida de la humanidad, mientras que la otra parte, la numéricamente mayor, es despojada de ella por medio de mecanismos diversos. En este despojo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen una gran responsabilidad. Si el fenómeno de la pobreza es estructural, también lo es su superación. Así, pues, no se trata de agregar el desarrollo social al económico. La política social verdadera no es la que compensa la acumulación de la riqueza, sino aquella que busca evitarla, impidiendo que

los otros sean despojados de aquello que les pertenece legítimamente y que el medio ambiente sea depredado. La compensación es funesta, porque, estructuralmente, no hace más que tapar agujeros.

No olvidemos que, en estos momentos, el desarrollo económico capitalista está conformado por la apertura de las economías y por el control de la actividad económica mundial por parte de las transnacionales, radicadas en el norte. A esta nueva fase se llega por la desregulación del mercado financiero internacional, por la sustracción de las monedas y los tipos de cambio del control nacional, por la desprotección de los mercados nacionales y regionales, en una palabra, por la apertura plena de las economías nacionales a la competencia internacional. Tanto hoy como ayer, el objetivo es el mismo, aunque los mecanismos son distintos, seguir enriqueciendo a los que ya son ricos, mientras se despoja a los demás.

Esto es precisamente lo que el gobierno salvadoreño pretende llevar a cabo como la gran panacea nacional, yendo más allá de lo que el capitalismo mundial espera de un país como El Salvador. Los planificadores gubernamentales salvadoreños piensan erradamente que al fin han encontrado el camino seguro para alcanzar el nivel de desarrollo, buscado en vano durante décadas. Pero con mucha probabilidad lo que van a provocar es una catástrofe de grandes proporciones. Más aún, piensan que si hay desarrollo económico, habrá bienestar social. En el fondo lo que se quiere evitar es la reestructuración del orden capitalista internacional y nacional. Por lo tanto, no se puede formular una política social real sin cuestionar drásticamente la política económica neoliberal vigente.

Si el desarrollo económico de Estados Unidos y de los otros países industrializados no es universalizable, menos lo es su desarrollo social. Las condiciones generales de vida de su población, lejos de caracterizarse por la realización humana, la solidaridad y la armonía consigo misma, con los demás y con el medio, se caracterizan por la insatisfacción profunda, la violencia social, familiar y personal, el egoísmo y la competencia salvajes, la degradación del medio social y ambiental y, en una palabra, por la insatisfacción, la angustia y el sinsentido. Esto es lo que se percibe en la mayor parte de las expresiones culturales que transnacionalizan y con las que hegemonizan al tercer mundo. En los países industrializados son cada vez más quienes se preguntan si no

La cumbre pudo haber hecho un aporte mucho más valioso si además de analizar la pobreza y sus efectos devastadores... se hubiese también preguntado por qué predomina la pobreza en lugar del bienestar general.

habrán perdido algo más valioso que las posibilidades de consumo que han ganado. En efecto, con el desarrollo capitalista han ido perdiendo la posibilidad de humanizarse y de humanizar.

Hay que desentenderse, pues, del término desarrollo, al menos en sus acepciones tradicionales porque, en lugar de iluminar por dónde se debe avanzar en la erradicación de la pobreza, encubre ideológicamente las políticas e intervenciones que la profundizan. Por esta razón, a lo largo de este editorial, hemos evitado cuidadosamente el término, así como su contrario —subdesarrollo—, referido a aquellos países y sociedades que todavía se encuentran lejos de la meta representada por Estados Unidos. En lugar de cumbre del desarrollo social, es más apropiado hablar de cumbre de la pobreza.

El punto de partida para construir un movimiento de resistencia frente al nuevo despliegue de la economía mundial capitalista es cuestionar sus fundamentos ideológicos: el desarrollo como objetivo y destino universal de la humanidad, la globalización de la economía como una necesidad histórica y como medio único para extender el desarrollo, y la competitividad del mercado libre mundial como único instrumento adecuado para regular el funcionamiento de la economía globalizada. En realidad, lo que hace falta es solidaridad local, nacional y global.

También hay que trabajar arduamente para que la población de cada región, país y comunidad pueda satisfacer sus necesidades básicas, sociales y culturales, incluidas la organización y la participación en las decisiones que la afectan. Para contrarrestar el efecto desmovilizador de la política neoliberal en la población es importante demostrar prácticamente



la existencia de alternativas viables. El mejor antídoto contra el conformismo y la pasividad es la demostración de la viabilidad práctica de una alternativa.

La cumbre de la pobreza tiene el mérito de llamar la atención mundial sobre uno de los males peores de la humanidad, pero con ello únicamente se ha dado el primer paso. Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a propuestas realmente eficaces que contribuyan a erradicar ese gran mal que azota a la humanidad. En este sentido, hay que trabajar explorando mucho más la "civilización del trabajo", propuesta por Ignacio Ellacuría.

La cumbre evidencia hasta dónde pueden llegar Naciones Unidas y los gobiernos, particularmente en el campo de las propuestas. Estos últimos todavía no están convencidos que la seguridad y la paz verdaderas descansan en la justicia social. El miedo ante la amenaza que representa la migración masiva y constante de pobres del sur hacia el norte, tanto en el continente americano como europeo, tampoco fue suficiente como para comprometerse con acciones radicales y eficaces. Por lo tanto, corresponde a la sociedad y a sus organizaciones crear y presionar para avanzar en la erradicación de la pobreza y en la injusticia que la origina. La cumbre sobre la pobreza no tiene la última palabra, ni mucho menos. Quedan muchas otras palabras por decir aún.

San Salvador, 30 de marzo de 1995.